



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés**

**19-336**

Proceso: **CONSULTA**  
Demandante: **MARIA CORA DE JESUS MORENO DE RODAS**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No: **05001-31-05-002-2017-00921-02**  
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en consulta la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 012** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Pretende la demandante en nombre propio que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de cónyuge JAIME RODAS GIL desde el 13 de mayo de 2016, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación, las costas del proceso y lo que ultra y extra petita resulte probado.

##### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- Que convivió con el señor JAIME RODAS GIL desde el 14 de enero de 1972 cuando contrajeron matrimonio, hasta el 13 de mayo de 2016, fecha del deceso de aquel, sin llegar a separarse.
- Que su cónyuge cotizó al ISS hoy Colpensiones un total de 349.43 semanas entre el 14/09/1975 y el 30/06/1995.
- Que el 17 de abril de 2015 solicitó la pensión de sobrevivientes a Colpensiones, siéndole negada a través de Resoluciones SUB 69071 del 14 de mayo de 2017 con el argumento de que el causante no había cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, según lo exige la Ley 797 de 2003, ni contaba con las 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte conforme lo exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para considerar la aplicación de la figura de condición más beneficiosa.

### 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**Controvirtió** la entidad demandada el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como cierto que la fecha de deceso del causante, la reclamación a la entidad y el contenido de la resolución que le negó la pensión de sobrevivientes a la actora. Respecto a los demás hechos señaló que no le constan o se trata de apreciaciones subjetivas de la parte actora que serán objeto de debate probatorio.

### 1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Inicialmente se profirió sentencia proferida el 22 de octubre de 2019 y se remitió el proceso en consulta, sin embargo dicha sentencia no quedó grabada, por lo que el proceso se devolvió al juzgado para su reconstrucción; sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar el registro de la audiencia y al no haber sido el mismo juez quien había presidido la misma, el a quo, a través de auto del 21 de febrero de 2023 ejerció control de legalidad, declarando la nulidad de lo actuado a partir del auto que fijó fecha para audiencia para realizar de nuevo la misma.

Mediante sentencia 24 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín se **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora **MARIA CORA DE JESÚS MORENO DE RODAS**, a quien condenó en costas.

## 2. ARGUMENTOS

### 2.1. DEL JUEZ

Estimó que en el proceso se encuentra probado que el señor JAIME RODAS GIL no dejó causada la pensión de sobrevivientes para sus posibles beneficiarios, según requisitos exigidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 797 de 2003, dado que no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la muerte, pues en este lapso no cotizó ninguna semana.

Agregó que si bien la Corte Suprema de Justicia en desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política ha considerado que cuando el afiliado no deja causados los requisitos exigidos en la norma vigente, es posible la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y acudir a la norma inmediatamente anterior al cambio legislativo, es decir, que en este caso sería la Ley 100 de 1993, en el caso de autos no se cumplen los requisitos establecidos en la sentencia SL SL4650-2017 para la aplicación de dicho principio, dado que la muerte se produjo en noviembre de 2016, es decir, con posterioridad al límite temporal de los 3 años después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003. Aunado a lo anterior indicó que tampoco puede aplicarse el Decreto 758 de 1990, pues si bien el causante dejó cotizadas 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no se acreditan los requisitos del test de procedencia establecidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-005 de 2018, por lo que absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones en su contra.

## **2.2. CONSULTA**

Dentro del término otorgado por la Ley no se interpuso ningún recurso, y como la decisión fue absolutoria en contra de la demandante, el proceso fue remitido para surtir el grado jurisdiccional de **CONSULTA**, según lo dispone el artículo 69 del CPT y SS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

## **2.3. ALEGATOS DE COLPENSIONES**

La apoderada de la demandada solicita se confirme la decisión absolutoria de primera instancia, toda vez que el señor JAIME RODAS GIL no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a la luz de la norma vigente al momento de su deceso ocurrido el 13 de mayo de 2016, esto es la Ley 797 de 2003, dado que no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte, pues en este lapso no cotizó ninguna semana, ya que su última semana fue el 30 de abril de 1998. Agregó que conforme a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el causante tampoco acredita las 26 semanas de aportes en el último año a la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003, esto entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002; es decir no reunió las 26 semanas cotizadas en el año

inmediatamente anterior a su muerte y para la fecha del fallecimiento no se encontraba activo en el Sistema General de Pensiones.

Po consiguiente, insiste que no es posible reconocer una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del causante, el señor JAIME RODAS GIL, pues no se cumplen con los requisitos mínimos establecidos para acceder a ella. Por lo tanto, las demás pretensiones deben quedar desestimadas, esto aunado a que ni la demandante ni su apoderado se presentaron a la audiencia por lo que no fue posible determinar siguiera la convivencia o dependencia con el causante.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Consiste en determinar si en el presente caso es posible reconocer la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y dependiendo de ello se analizará si la demandante acreditó su calidad de beneficiaria y desde que fecha se debe reconocer la prestación.

### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

En primer lugar, no es objeto de discusión que como el señor JAIME RODAS GIL, falleció el 13 de mayo de 2016 la normatividad vigente para entonces es el artículo 46 de la ley 100 de 1993 con la modificación del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que establece como requisitos para dejar causada la pensión de sobrevivientes cuando se trate de la muerte de un afiliado que éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Y según se desprende de la relación de semanas cotizadas que hace la entidad en la Resolución SUB 69071 del 18 de mayo de 2017 visible a folios 33 del archivo 02 del expediente digital, a través de la cual se negó la pensión de sobrevivientes a la demandante, la entidad acepta que el causante cotizó 350 semanas en toda su vida laboral, teniendo como último aporte, el 1º de julio de 1995, por lo que no tiene ninguna semana cotizada en los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento, no acreditando los requisitos exigidos en la norma en comento para dejar causada la pensión de sobrevivientes.

Por consiguiente, desde la demanda se solicitó aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el cual se encuentra contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política y ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Suprema de Justicia, y que opera en casos donde el causante no dejó acreditadas la densidad de semanas exigidas por la normatividad vigente a la fecha del fallecimiento para que sus beneficiarios pudieran acceder a la prestación que ampara tal riesgo y el afiliado había

dejado acreditados los requisitos en vigencia de la normatividad que precedía se puede dar aplicación a la norma anterior por serle más favorable.

Así mismo, es importante señalar que si bien es cierto que inicialmente dicho criterio jurisprudencial entorno del llamado '*principio de la condición más beneficiosa*' en materia de pensiones de invalidez y sobrevivientes, fue limitado a las situaciones ocurridas en vigencia de las normas originales de la Ley 100 de 1993 y que, por tal razón, ameritaban acudir a las que gobernaron el esquema normativo inmediatamente anterior, esto es, al Decreto 758 de 1990, también lo es que en sentencia hito de 25 de julio de 2012 con Radicación 38674, tal criterio de protección fue ampliado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el referido principio también tenía cabida en tratándose de preceptivas inmediatamente sucesivas, como lo son las previstas en las normas que han modificado los regímenes pensionales del Sistema General de Pensiones de la citada Ley 100 de 1993, esto es, las de las leyes 797 y 860 de 2003, respectivamente.

Posteriormente la Corte Suprema de Justicia en sentencia 45262 del 25 de enero de 2017 (SL4650-2017) unificó el criterio imperante en la materia, y adoctrinó que, en controversias relativas a pensiones de sobrevivientes, para que se aplique el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, en lugar del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, cuando no se tengan las 50 semanas cotizadas en los tres últimos años anteriores al deceso del causante, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se debían cumplir los siguientes requisitos:

*"(...)se debe conceder la pensión de sobrevivientes, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos*

**3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo**

- a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando.
- b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003.
- c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006.
- d) Que al momento de la fallecimiento estuviese cotizando, y
- e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso.

**3.2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo**

- a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.
- b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002.
- c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006.
- d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y
- e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento.

**4. Combinación permisible de las situaciones anteriores**

A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:

**4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleció no estaba cotizando**

*La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.*

*Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la muerte - « hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, es dable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, no aplica tal postulado.*

*Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.*

#### **4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleció estaba cotizando**

*Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002.*

*Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la muerte - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente se aplica el postulado de la condición más beneficiosa. La Sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este último supuesto, no se aplica dicho principio.(...)”*

Sin embargo, en el caso de autos no se cumplen dichos requisitos, toda vez que el causante no estaba cotizando al momento del cambio normativo ni cuando falleció y no cuenta con 26 semanas dentro del año anterior a ninguno de estos momentos, por lo que no es posible enmarcarlo en ninguna de las hipótesis posibles, pues en vigencia de la Ley 100 de 1993 solo cotizó 61 días, es decir, 8.71 semanas.

Ahora, si bien la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en mención, señaló que para poderse dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa en el transito legislativo entre la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993, era presupuesto que la muerte ocurriera dentro de los tres años siguientes a la fecha de la entrada en vigencia de la citada Ley 797 de 2003, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, estableciendo un límite temporal para la aplicación de dicho principio, no puede desconocerse que la Corte Constitucional a través de sentencia SU 442 de 2016, dictada el 18 de agosto de esa misma anualidad, permite la aplicación del principio de la condición más beneficiosa sin ningún tipo de límite temporal, pues incluso se permite el salto normativo, a disposiciones que no fueran la inmediatamente anterior. En la descrita providencia a este respecto se indicó:

*“Con fundamento en las anteriores razones, en concepto de la Sala Plena de la Corte, el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia. Por lo demás, una vez la jurisprudencia ha interpretado que la condición más beneficiosa admite sujetar la pensión de invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa legítima, no puede apartarse de esa orientación en un sentido restrictivo, a menos que se ofrezcan razones poderosas suficientes que muestren que: (i) la nueva posición tiene mejor sustento en el orden legal y constitucional, (ii) los argumentos para apartarse priman sobre los principios de seguridad jurídica,*

*confianza legítima e igualdad de trato que están a la base del respeto al precedente constitucional, y (iii) está en condiciones de desvirtuar la prohibición de retroceso injustificado en materia de derechos sociales fundamentales, establecida en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Hasta el momento no se han aportado razones de esta naturaleza, por lo cual la jurisprudencia de esta Corte, encargada de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución, se mantiene y es vinculante para todas las autoridades, incluidas las judiciales (CP. Art. 241)."*

Posteriormente la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-005 de 2018, recordó que la jurisprudencia suplió el vacío del legislador al no establecer un régimen de transición ante un intempestivo cambio normativo, pues sólo lo hizo respecto de la pensión de vejez, no así la de invalidez o sobrevivientes, permitiendo su modificación de manera abrupta o arbitraria, cercenando expectativas legítimas. Por ello, y siendo más garantista que la Corte Suprema de Justicia, avaló la aplicación ultractiva de requisitos previstos en leyes derogadas, que no necesariamente se circunscribían a la inmediatamente anterior, consintiendo así, contrario a la jurisprudencia pacífica de su homóloga, una búsqueda por el esquema normativo estableciendo un test de procedencia, para determinar si en cada caso quien reclama se encuentra en situación de vulnerabilidad, la Corte fijó unos presupuestos, que son los siguientes:

(i) Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.., (ii) Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas., (iii) debe establecerse que el solicitante dependía económicamente del afiliado que falleció de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario (iv) Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes y por último (v) Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

En dicha providencia, además, la Corte aduciendo, como fundamento de esta tesis, que el Acto Legislativo 01 de 2005 se expidió con el fin de preservar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, privilegiando la aplicación de la norma vigente al acaecimiento de la contingencia protegida por cada subsistema, razón por la que habría una carga desproporcionada para las entidades y/o fondos de pensiones, pues de no ponerse una limitante, no sería *"posible determinar, a ciencia cierta, el número de personas que pudieran reclamar, ad finitum"* la aplicación de una norma cuya vigencia expiró hace más de dos décadas, aunado a que expectativas legítimas tampoco podían ser inalterables como si fuesen derechos adquiridos, expectativas que surgían para quienes habiendo reunido la densidad de semanas de cotización para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes en un régimen, la muerte ocurría en otro y veían resquebrajada la confianza legítima como destinatarios de esa primigenia norma.

Es así como la Corte Constitucional concluyó que dicha expectativa debía ser salvaguardada pero únicamente frente a la población vulnerable, desechando la postura o *"zona de paso"* de la Corte Suprema de Justicia, quien a su juicio, respecto de este contingente de la población, implicaba una afectación a derechos fundamentales como la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, respecto de la restante población estimó que ni el criterio que incluso fijó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, era

contrario a la Constitución, casos en los que el legislador sí tenía una amplia potestad de configuración que encontraban su límite en *“la realidad social y económica nacional”*, lo que también se sustentaba en la *necesidad de homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales, con el fin de lograr una mayor equidad y sostenibilidad del sistema, en términos de igualdad y universalidad*. Concluyendo que la regla fijada en la sentencia SU—005 de 2018, según la cual el principio de la condición más beneficiosa da lugar a que se apliquen de manera ultractiva las disposiciones del Decreto 758 de 1990 a aquellos que superen el test de procedencia.

En el caso de autos, desde la demanda se pretende la aplicación ultractiva del Decreto 758 de 1990, dado que el señor JAIME RODAS GIL cotizó más de 300 semanas en vigencia de dicha norma, a pesar de que su fallecimiento ocurrió el 13 de mayo de 2016, esto es, en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, es imperioso que la señora MARIA CORA DE JESÚS MORAENO supere el test de vulnerabilidad establecido en la sentencia SU-005-2018, pues si bien es cierto que para la fecha de radicación de la demanda esta sentencia no se había expedido, lo cierto es que en la actualidad y cuando se profirió la sentencia de primera instancia, ya la Corte Constitucional, a través de la sentencia en mención había fijado unas subreglas para la aplicación del mencionado principio, las cuales no pueden ser desconocidas por el juez, pues al ser una sentencia de unificación es de obligatorio cumplimiento para el juzgador. Aunado a lo anterior, cuando la Corte Constitucional profirió la citada sentencia estableciendo los requisitos que debían superarse para acceder a la prestación, si bien ya la demanda se había radicado, aun no se habían superado las demás etapas procesales, por lo que ante este hecho sobreviniente, la parte actora pudo haber allegado alguna prueba, aunque fuera sumaria con el fin de acreditar los requisitos establecidos en la misma, o haberle solicitado al juez que se hubieran decretado pruebas con este fin.

Sin embargo, la parte actora no arrió al plenario ninguna prueba que permita determinar que la señora MARIA CORA DE JESÚS MORENO, estuviera en condición de vulnerabilidad, ya que si bien se trata de una persona con una discapacidad por una enfermedad crónica y que en la actualidad tiene 73 años de edad, no se probaron los demás requisitos del test de vulnerabilidad, pues no hay ninguna prueba que de cuenta de que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas de la accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas; ni tampoco que esta dependiera económicamente del afiliado que falleció o que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes, ya que la parte actora no allegó ninguna prueba al respecto, por el contrario, mostró un total desinterés ya que ni siquiera asistió a la audiencia ni presentó los testigos, incumpliendo la carga probatoria que le impone el artículo 167 del C.GP..



En consecuencia, encuentra la Sala que el causante no dejó acreditados los requisitos para que sus posibles beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes y por tanto habrá de CONFIRMARSE la decisión del juez de primera instancia de absolver a la demandada de todas las pretensiones en su contra.

Sin costas en esta instancia.

#### 4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,


#### DECIDE


**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 24 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARIA CORA DE JESÚS MORENO DE RODAS**, identificada con c.c. 32.469.433 contra **COLPENSIONES**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MARIA CORA DE JESUS MORENO DE RODAS**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No: **05001-31-05-002-2017-00921-02**  
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**  
Fecha de la sentencia: **25/04/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **26/04/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario